

Recuerdos del Proceso, imágenes de la Democracia: luces y sombras en las políticas de la memoria.

Luis Alberto Romero

Conferencia en el Primer Coloquio “Historia y memoria”: perspectivas para el abordaje del pasado reciente. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 18 a 20 de abril de 2002. Reproducido en Clío & Asociados. La Historia Enseñada, VII, 2003.

Vengo a este Coloquio con muchas menos certezas y convicciones que en ocasiones anteriores. Mis dudas se refieren a la eficacia y a los resultados no queridos de las políticas de la memoria que todos hemos impulsado.¹ En los últimos quince años, esas políticas de la memoria apuntaron al sistema educativo, y muy especialmente al nivel medio, y se concentraron en el “Proceso”.² Se trataba de sacar a la luz y hacer conocer la acción represiva de esos años, de modo de generar sentimientos de rechazo y horror. Esos sentimientos cumplieron un papel fundamental en la tarea de construcción de la democracia, iniciada inmediatamente después de la guerra de Malvinas. Muchos de nosotros coincidimos en que era una tarea cívicamente significativa; para sintetizarlo en un ejemplo: concordamos en la importancia de que los adolescentes leyeran Nunca más. En lo fundamental, fue una tarea exitosa: el Proceso llegó a ser aborrecido. Mi pregunta hoy es: ¿fortalecimos de manera duradera la democracia?

No tengo una respuesta categórica para ofrecer. Tampoco creo que la haya: los historiadores sabemos que una cosa son las intenciones que guían las acciones y otra distinta sus resultados; dicho de otro modo, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. También sabemos que, si juzgamos un conjunto de prácticas sociales a la luz de un valor, encontraremos que usualmente ellas aportan tanto a su afirmación y realización como a su negación, puesto que las prácticas componen elementos diferentes, e incluyen todo tipo de transacciones, mientras que el valor pertenece a la esfera imaginaria y es puro y absoluto. Profundizar en esa distinción puede ser útil no solo para comprender mejor, sino para actuar más correctamente, asumiendo esa ambivalencia.

Políticas de la memoria y conocimiento histórico

Hace unos años, con motivo de un cambio de opiniones respecto de lo sucedido a principios de los años '70, Tulio Halperin Donghi zanjó la cuestión afirmando que ni él ni yo nos basábamos en sólidas reconstrucciones historiográficas: simplemente nos

¹ Usaré en lo sucesivo la primera persona del plural, para indicar que aunque lo examinado son acciones y posiciones públicas, con sujetos precisos y definidos, no me siento ajeno a ellos; se trata, en buena medida, de una autocrítica.

² Llamaré así al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, es decir a la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983. Aunque se bien que es considerado más correctp llamarla “Dictadura”, creo que tal denominación carece de precisión, pues no establece ninguna diferencia respecto de otras dictaduras. En general, prefiero utilizar las denominaciones de época, o las que los propios protagonistas se dieron. En lo sucesivo, omitiré las comillas, por obvias.

acordábamos distinto.³ Así dicho, la distinción es clara: la memoria del pasado, fuertemente asociada con la conciencia histórica, es algo distinto del saber científico sobre ese pasado, aunque entre una y otra actividad –saber o recordar- existan amplias zonas de superposición.⁴

No se trata solo de una cuestión de grado, precisión o profundidad. Conscientes de su presente, su futuro y su pasado, las sociedades y sus actores, al igual que los individuos, son libres para recordar y proyectar lo que más le convenga. En la construcción del relato del propio pasado no hay exigencia de “verdad” alguna sino pura conveniencia. Acordarse, olvidar, tergiversar, subsumir, seleccionar, alterar, silenciar, inventar: todas son operaciones válidas para quienes, en definitiva, están construyendo su identidad.

Los historiadores, un grupo circunscripto de profesionales que en otras esferas de su vida realizan estas mismas operaciones de invención y construcción, han hecho del conocimiento del pasado un saber científico. Nadie espera llegar a la verdad absoluta, a “lo realmente ocurrido”: es sabido que todo conocimiento es a la vez parcial y superable. Pero asumen ante sus pares, los miembros de una comunidad del saber, el compromiso de hacer lo posible por reducir y controlar el sesgo propio de cada perspectiva. Se trata de una suerte de juramento hipocrático: practicar con rigor las reglas del oficio, extremar la autocrítica para achicar el margen de inevitable subjetividad, dar cuenta de los propios supuestos y valores, y sobre todo someter sus resultados al escrutinio de la comunidad académica. Allí, en ese ámbito de debate profesional, se determina si el trabajo ha sido suficientemente riguroso, si los resultados están dentro de los límites de lo admisible, de modo que puedan ser confrontados, desarrollados o superados. En el campo del saber no hay verdad definitiva, pero existe en cambio conocimiento válido para un cierto momento y contexto. Algo sin duda modesto respecto de las decimonónicas aspiraciones de conocer “lo que realmente ocurrió”, pero que marca claramente las diferencias respecto de quienes hacen de la memoria un ejercicio libre e interesado.

Un historiador vive en ambos mundos: el de la conciencia histórica de su tiempo, y el del saber profesional. Frecuentemente, recoge sus preguntas y sus enfoques de las preocupaciones de su tiempo. También es común que se sienta llamado a intervenir en los debates ciudadanos, aportando a la controversia una opinión; quizás esté fundada en su saber, pero esto no es muy relevante. En este caso, se incorpora a un debate que suele ser denso, pues lo propio de la memoria de una sociedad es la cantidad de voces que intentan darle forma: políticos, publicistas, periodistas, intelectuales, músicos, poetas, novelistas, ciudadanos llanos, cultores diversos del conocimiento del pasado, y hasta historiadores profesionales. No hay dudas de que el pasado es de todos: un campo conflictivo y un lugar para la política, pues moldear una determinada imagen del pasado supone siempre definir una posición en el presente y proponer una opción a seguir.

Hay en suma una política de la memoria, desentendida de la modesta verdad circunstancial del historiador profesional, que aspira a darle al pasado recordado una cierta forma. Hubo

³ Esa generosa afirmación de Tulio Halperin Donghi puede leerse en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, número 12, 3ra serie, Buenos Aires, 2do semestre de 1995.

⁴ Este fue el tema de mi primera intervención en estos Encuentros, en abril de 2000.

políticas de la memoria antes de que la fórmula se convirtiera en moda y hasta fundara un campo académica: la figura de San Martín es un buen ejemplo. Nuestra política de la memoria, la que practicamos desde el fin de la guerra de Malvinas, tuvo como propósito construir una imagen del Proceso tal que sirviera para fundamentar la nueva Democracia.

Las políticas de la memoria en la educación

En la educación, las políticas de la memoria se han desarrollado principalmente en dos campos curriculares: la Historia y el Civismo. Sus propósitos eran concurrentes: en el primer caso, un conocimiento certero del pasado, que a la vez fundamentara nuestra identidad nacional; en el otro, un conocimiento preciso de nuestras instituciones constitucionales, que capacitara al ciudadano y lo estimulara a valorarlas. Ambos confluían en un proceso único de constitución de los valores del ciudadano.

A lo largo del siglo XX ambos campos curriculares perdieron su eje. En el caso de la historia, la imagen del pasado histórico y de la identidad argentina se simplificó y resultó dominada por una idea totalizante de nación, con fuertes componentes militares y clericales. Alejada de los sucesivos movimientos de renovación historiográfica, la llamada “historia oficial” fue perdiendo la legitimidad fundada en el saber. Pero además, confrontada con situaciones de alta conflictividad política y social, y asociada con uno de los actores del conflicto, perdió también la capacidad de convocar a la unidad. Luego de 1984, poco había en la historia de los héroes de bronce, instalada en manuales y programas, que fuera útil como material para la construcción de la democracia. Por entonces, en el marco de la reforma educativa de los años ‘90, la enseñanza de la historia se abrió a una renovación de enfoques que quizá la actualizó en términos científicos –esto es tema de otra discusión-, pero no aportó mucho a la fundamentación histórica de la nueva ciudadanía, pues en verdad, los constructores de la democracia no podían apelar a casi ninguna raíz histórica.

En el caso del civismo, con una tradición disciplinar mucho más débil, las oscilaciones fueron más marcadas. Tradicionalmente había sido el campo de la alfabetización constitucional: el aprendizaje de las leyes, los derechos y las obligaciones. Se trataba de un saber íntimamente articulado con valores liberales y democráticos. En algún momento, ese contenido centrado en la Constitución se abandonó, y el espacio curricular del civismo, a través de muchos nombres diferentes, se convirtió en el lugar de la ideología y el adoctrinamiento. Primero fue el adoctrinamiento peronista, y luego un adoctrinamiento “democrático”, notoriamente faccioso. Por entonces se instaló un nuevo enfoque del civismo, que se mantuvo casi sin interrupciones hasta 1983: la versión neotomista de la sociedad, la política y el estado, que empezaba con la familia y el municipio, considerados células naturales de la sociedad, seguía con las instituciones intermedias y remataba en el Estado corporativo, ajustado al orden natural.⁵

⁵ La cuestión del civismo, bastante más compleja y matizada, ha sido expuesta en: Silvina Quintero y Luciano de Privitellio "La formación de un argentino. Los manuales de civismo entre 1955 y 1995". *Clio y Asociados. La historia enseñada*. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, nº 4, Año noviembre de 1999.

Desde 1984, nos hemos propuesto que la historia y el civismo concurren a fundamentar la construcción democrática. Sobre el civismo, hubo un amplio consenso en torno de los valores vinculados con los derechos humanos –por cierto, el tema de los deberes no aparecía con el mismo énfasis- que debían estar presentes en casi cualquier contenido, pues eran “transversales”. Es llamativa la dificultad para traducir estos consensos en un conjunto de contenidos curriculares específicos, a los que se asignara un “espacio curricular”, así como la renuencia a hacer de la letra de la ley un tema de aprendizaje.

La historia no podía suministrar un relato orgánico que condujera a fundamentar la democracia; podía en cambio encararse la enseñanza del “pasado reciente”, despegado del “pasado pasado”, en cuyo centro se ubicaba el Proceso, convertido en objeto de aborrecimiento. Lo que se enseñaba en las clases de historia, un poco a contrapelo de los contenidos programáticos, se sumó a la acción cada vez más sistemática de los establecimientos educativos, que incorporaban la conmemoración del Proceso al calendario de efemérides escolares, o promovían actividades extra curriculares de discusión y esclarecimiento. Sobre todo, operó en la escuela el movimiento de la opinión pública, y la acción de las distintas organizaciones de derechos humanos, que mantuvieron siempre vivo el debate sobre el Proceso y sus responsables. Sobre estas bases, en cada establecimiento debe de haberse librado un combate subterráneo entre quienes asumían esta tarea como un compromiso cívico y quienes, por distintas razones –temor, discrepancia ideológica-, se mostraban remisos; seguramente no hubo voces explícitamente defensoras del Proceso y sus ejecutores.

Es difícil tener un conocimiento de conjunto de lo ocurrido, y probablemente cada uno juzgará esos resultados a partir de su propia experiencia. La mía, por cierto muy limitada, es que hubo avances reales e irreversibles en la condena del Proceso y en la aceptación de que ese era un tema válido, central o periférico, del curriculum escolar. También es clara su relación con la construcción de la democracia que, bueno es repetirlo, carecía prácticamente de tradiciones reconocibles y debía fundarse principalmente en un acto de fe colectiva, una afirmación a priori de sus valores y de su potencia.

El horror al Proceso suministró esa convicción: salíamos de las tinieblas y entrábamos en el reino de la luz. Son manifiestos los éxitos inmediatos de esta política de la memoria, de esta construcción de un pasado de espanto. El Proceso fue, en esta versión, un genocidio practicado por los militares, que transformó a la sociedad toda, a la gente, en su víctima. Así contado, implicaba el olvido del apoyo o del consentimiento, deliberado o no, prestado por muchos de los nuevos cultores de la democracia. No hay dudas de que muchos de los que en 1981 estaban atrapados por el discurso de “los argentinos derechos y humanos”, o de los que en abril de 1982 vivaron a los jefes militares que habían “reconquistado” las Malvinas, adherían con sinceridad y entusiasmo a las ideas que supo sintetizar en su campaña electoral Raúl Alfonsín. En ese sentido, el éxito de esta política fue rotundo.

Memoria del Proceso e imagen de la Democracia

Llego al momento de las dudas, de las sombras: los efectos no queridos de una política de la memoria que en su momento me pareció altamente virtuosa, que apoyé sin vacilaciones,

y que aún considero, en lo sustancial, correcta.⁶ Pero los historiadores, así como cualquier persona con sentido común, saben que la realidad no se compone de blancos y negros, que lo bueno, o lo malo, nunca está todo junto en un lugar, o dicho de otra manera, que no hay rosas sin espinas. El historiador y el ciudadano coexisten en la misma persona, pero con tensiones y conflictos, que al menos deben ser reconocidos.

Hemos logrado mucho más en el aborrecimiento al Proceso que en su comprensión. Aunque no faltan textos excelentes, todavía ocupan un lugar secundario en la producción académica, y esta ha podido influir poco en el sentido común, sobre todo en el de aquellos formados en la lucha por la defensa de los derechos humanos, incluyendo a los padres y a los hijos de sus víctimas. El principal problema es que el Proceso ha sido demonizado y convertido en algo ajeno a la sociedad y la experiencia histórica argentina. En el imaginario democrático los culpables son los militares y el reducido grupo de defensores de intereses privilegiados que los rodean, pero su acción e ideas parecen tener poco que ver con nosotros, la gente, la sociedad, restaurada en sus derechos en 1983.⁷ Me ocupé de ese tema aquí mismo, en abril de 2001, y concluí la exposición diciendo: “en su excepcional maldad, fueron criaturas de nuestra sociedad”.⁸ Podría agregar ahora que esas raíces se mantuvieron vigorosas en la sociedad argentina, y que siguieron dando sus frutos.

En ese momento me preocupaba el conformismo, asociado con una celebración que parecía cada vez más ritual. Hoy puedo agregar otro motivo de alarma: las actitudes, juicios y prácticas maniqueas que se desarrollaron al calor de esa imagen. El maniqueísmo, en una cierta medida, es bueno para alimentar la convicción y la fe colectiva y constituir una identidad, y la nueva democracia necesitaba mucho de ello. Pero a la vez, es malo para la comprensión. Sobre todo, puede ser la fuente de una nueva intolerancia, manifiesta tanto en las prácticas como en las ideas.

En las prácticas, la intolerancia ha sido creciente. Para algunos, la memoria del Proceso se ha convertido en arma de lucha; distintas organizaciones constituidas en torno de la defensa de los derechos humanos se han considerado autorizadas a abandonar los principios que en su momento constituyeron su principal aporte a la construcción de la Democracia: la idea de derechos, el respeto a la ley, la tolerancia. Una cosa es mostrarle a los vecinos de un barrio que una persona de apariencia normal es fehacientemente un torturador; otra muy distinta es su linchamiento. Una cosa es aplicar esos métodos de denuncia pública a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y otra es usarlos contra aquellos con quienes se disiente políticamente. Entre una y otra cosa transcurre la línea que separa la acción cívica

⁶ Con ese espíritu, en 1992 escribí mi *Breve historia contemporánea de la Argentina* (2da ed., Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000). Incluí allí una sección sobre el *modus operandi* de la represión, de extensión desproporcionada dentro de la economía del libro, pero que me pareció cívicamente necesaria. También utilicé fórmulas, como “genocidio”, que hoy reconozco incorrectas, y que quedan como un testimonio de época.

⁷ Una operación similar hemos hecho con la Guerra de Malvinas y las responsabilidades pertinentes: los únicos culpables fueron unos militares enajenados. Inclusive preferimos no preguntar cuál fue exactamente su culpa: ir a la guerra o simplemente perderla. Luis Alberto Romero, “¿Qué hicieron mal los militares? Malvinas, veinte años después.” *Puentes*, Buenos Aires, 2002 (por aparecer).

⁸ Una versión de esta ponencia en Luis Alberto Romero, “La sociedad como cómplice, partícipe o responsable. Las raíces de la Dictadura”, *Puentes*, Buenos Aires, marzo de 2001.

digna y la barbarie. En muchas de las prácticas que se han vuelto habituales en los últimos años esa línea parece a punto de ser cruzada.

Hay otra intolerancia, que es la del pensamiento. Afecta a quienes no quieren apartarse del camino de la corrección política y se aferran a sus formas exteriores, convertidas en fetiches y tabúes. Es sintomática la facilidad con que en estas exitosas políticas de la memoria se ha asimilado el Proceso con el “Holocausto”,⁹ como si uno explicara automáticamente al otro: fórmulas o símbolos utilizados en nuestra política de la memoria han sido tomados, sin un examen crítico, de la experiencia del nazismo. Es indudable que con ello se ha ganado en eficacia; pero también se ha perdido en comprensión. El repudio al Proceso se apoya en palabras o fórmulas fuertes, colocadas más allá de la comprensión racional. Cualquier esfuerzo de indagación que cuestione alguna de las denominaciones, clasificaciones o fórmulas es considerado una amenaza para el edificio todo. Se postula inclusive que una parte de la experiencia del horror es inaccesible a la razón, un razonamiento teológico digno de San Agustín.

En el campo de nuestra política de la memoria, la palabra “genocidio” se ha impuesto como forma de denominar la masacre de disidentes políticos; aporta al aborrecimiento del Proceso el conjunto de los sonidos armónicos que resuenan con el Holocausto: al fin, todos los responsables son “fascistas”, otra palabra simbólica.¹⁰ Hace un año, en un Encuentro similar a éste, Silvia Sigal desató la indignación de un sector del auditorio, políticamente correcto, cuando señaló la escasa pertinencia de la palabra –no había habido criterios étnicos en las matanzas- y a la vez su capacidad para encubrir la verdadera dimensión de la represión, que era política. Un razonamiento no solo más comprensivo sino, en el fondo, aún más correcto que el anterior fue rechazado en nombre de una amenazada ortodoxia de la palabra. En este punto, condenar parece ser más importante que comprender. El civismo aniquila el saber histórico.

El principal problema, en mi opinión, se refiere a la imagen resultante de la Democracia – me refiero al conjunto de la experiencia política iniciada en 1983- construida a partir del aborrecimiento del Proceso. En 1983, para sostener la nueva democracia y darle el tiempo necesario para afirmarse se apeló al aborrecimiento del Proceso. Frente a un régimen militar que sintetizaba las fuerzas todopoderosas del mal, la Democracia, igualmente potente, se identificaba con el bien. La Democracia lo podía todo. Era la panacea, una imagen que Raúl Alfonsín supo construir de manera convincente en sus discursos de campaña, a la que muchos adherimos con entusiasmo. Quizás debimos advertir entonces que lo bueno y útil para la acción ciudadana podía no serlo para la tarea intelectual de la comprensión. También, que los dos aspectos de la ecuación democrática –la potencia y la bondad del sistema- merecían ser sometidos a escrutinio. Lo cierto es que las posiciones vinculadas con el civismo, con la conciencia y con la militancia se impusieron a aquellas, necesariamente más matizadas y con menor capacidad de entusiasmar, relacionadas con el saber.

⁹ Al igual que con el “Proceso”, utilizo aquí la fórmula corriente, sin discutir su pertinencia.

¹⁰ La intervención de S. Sigal tuvo lugar en el II Encuentro internacional sobre la construcción de la Memoria colectiva. La Plata, 2001. La mención que hice de ella, al presentar esta ponencia en este Coloquio, todavía suscitó reacciones e indignaciones similares. Sobre mi propia responsabilidad en el uso de tal término, véase la nota 6.

Usaré una fórmula que tomo de la historia de Colombia: en el tramo inicial de la construcción democrática tuvimos una democracia “boba”, ilusa y confiada.¹¹ No estuvo mal: sin esa ilusión no habría habido democracia. Con esa ilusión, se sobredimensionó la capacidad de la Democracia, que debía dar a todo el mundo una solución satisfactoria de todos sus problemas. Es obvio que esto no es posible, en general, y en particular dado el conjunto de circunstancias de la Argentina post 1983, algunas antiguas y otras que eran el fruto reciente del Proceso. Exageramos su potencia, sin tener en cuenta la fuerza de esos condicionamientos, y también sobrevaloramos la buena fe de todos cuantos se habían incorporado, a veces algo tardíamente, a la empresa democrática. Cuanto más se esperó de la Democracia, más dura fue la confrontación con la realidad.

Es sabido que las democracias que existen realmente son siempre inferiores al ideal de Democracia, nunca realizado. El ideal tiene una formidable capacidad de movilización, pero todo movimiento en pos de un ideal supone, en algún momento, una cuota de desilusión, mayor o menor de acuerdo con la dosis de realismo con que se lo haya matizado. Con la Democracia construida en 1984 faltó en primer lugar una mirada crítica, que achicara la brecha entre el ideal y la realidad; luego, faltó también una mirada comprensiva, que procurara entender las razones de esa brecha. Faltó todo lo que usualmente puede proveer el saber histórico.

No se trata de que hayamos escrito malos libros de historia. Condujimos las cosas de modo tal que pasamos sin transición de la extrema ilusión a la desilusión. El objeto de amor pasó a ser objeto de demandas y críticas. Hasta es posible que, a fuerza de llevar la cuenta de las promesas incumplidas, terminemos haciendo de la Democracia un objeto de odio: no solo no sirvió para resolver nuestros males, sino que los agravó y hasta los ocasionó. Antes de que colegas académicos hayan comenzado a plantear la cuestión,¹² muchos hemos recogido este pasaje del amor a la crítica, y a las antesalas del odio en las conversaciones que hemos podido tener con estudiantes, quienes sin embargo no flaquean en su aborrecimiento al Proceso.

Un replanteo

De alguna manera, la crisis actual nos ayuda a entender mejor lo que pasó. Parece claro hoy que los problemas argentinos exceden ampliamente los de la democracia y se relacionan con cosas más profundas, como la índole del Estado, la ubicación del país en el mundo y aún los términos mismos del contrato político que, quizá precariamente, convirtió a un conjunto de personas asentadas en fragmentos territoriales en un Estado y una nación. Así

¹¹ En 1810 los patriotas de Santa Fe de Bogotá proclamaron una república independiente, liberal y democrática. Convencidos de la bondad intrínseca de sus ideas, no se preocuparon por construir de manera profesional y eficiente los medios materiales para sostener el nuevo poder. Dos años después, los realistas entraron en Bogotá y ejecutaron a los dirigentes independentistas. En la ocasión Simón Bolívar, que asumió la conducción de la guerra, denominó a ese período de la ilusión y la sobredimensión de las propias fuerzas como “la patria boba”.

¹² Por ejemplo, Alfredo Pucciarelli, “El régimen político de la democracia excluyente: el caso de la República Argentina”. *Sociohistórica*, 9/10, La Plata 2001. También José Nun, *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.

como no es fácil imaginar quien puede tener la clave de la solución, también resulta hoy excesivamente simplista echarle todas las culpas al Proceso. Si logramos superar la ira y la desesperación y podemos encarar nuevamente, en la escuela y en los ámbitos públicos de discusión, el examen de nuestra historia reciente, probablemente descubramos que es el momento de achicar esas apoteosis de la memoria, en las que colocamos al Proceso en una escala y clave explicativa similar al nazismo y al Holocausto, y de recordar las premisas básicas del saber de los historiadores.

Una de ellas es que ninguna sociedad construye algo de la nada: las cosas no surgen, como Palas Atenea, armadas y listas para la acción de la cabeza de ningún Zeus; ni el Proceso ni la Democracia. El Proceso no fue un suceso extemporáneo; estuvo ligado por múltiples lazos con la experiencia de la sociedad argentina, y muchos de ellos se mantuvieron luego de su derrumbe, inclusive robustecidos. Una buena tarea será examinar con los estudiantes, sine ira et studio, esa historia previa –al menos, todo el siglo XX-, que seguramente nos ayudará a comprender lo que nos pasa. En el mismo sentido la Democracia posterior a 1983, que debía en su imaginario renegar del pasado inmediato, se construyó en realidad con los materiales existentes, precarios, de desecho quizá. Los que había. Con políticos de larga militancia en épocas anteriores, con instituciones profundamente deterioradas –al fin, la Democracia debió gobernar con la Policía Bonaerense- y con valores solo parcialmente identificados con aquellos que usualmente fundamentan un sistema democrático: por ejemplo, hubo mucha más conciencia de los derechos que de los deberes. Las credenciales democráticas de los democráticos no eran impecables. Sospecho que un examen de este tipo hará menos nítida la línea que separa a los malos de los buenos.

Otra premisa de los historiadores es que la Democracia es apenas un sistema para elegir gobernantes, y eventualmente controlarlos, pero dice poco de las condiciones en que ese gobierno se ejerce. Los juicios acerca de lo que debió haberse hecho en cada coyuntura, usualmente ingenuos, lo son mucho más cuando suponen que las autoridades democráticas poseían un poder pleno, una potencia equivalente a la atribuida al Proceso. Los gobernantes elegidos democráticamente desde 1983 debieron conducir un Estado que, hoy lo sabemos, estaba ya profundamente minado: algo así como un auto con problemas en el freno, el acelerador y la palanca de cambios. Solo a partir de ese arqueo de caja de 1983 puede plantearse seriamente la pregunta sobre las responsabilidades, indudablemente grandes, de quienes participaron en esta experiencia democrática.

Porque, finalmente, no se trata simplemente de juzgar, a partir de valores absolutos, ideales y abstractos; se trata de saber y de comprender para poder asumir las responsabilidades: solo quien comprende puede juzgar adecuadamente y actuar en consecuencia. Son estos problemas, de ciudadanía y responsabilidades, los que deben ser adecuadamente planteados en el aula y en la discusión pública, desechando la tentación, recurrente por lo fácil, de atribuir las responsabilidades solo a “ellos”: el Proceso, los bancos, los españoles, el FMI o los políticos. Creo que es necesario volver a promover, a través de la enseñanza de la Historia, un saber más distanciado de las convicciones, menos inmediatamente empapado de civismo, con vistas a formar, no un historiador sino un ciudadano crítico. La apuesta es que una conciencia crítica defenderá finalmente los valores de la democracia mejor y más eficazmente que una conciencia ingenua.